



ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA
SOBRE
PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana, denominados en adelante "las Partes Contratantes",

con el propósito de crear condiciones favorables para una mayor cooperación entre los dos Estados y, en particular, de crear condiciones favorables para las inversiones italianas en Chile y chilenas en Italia,

persuadidos que la promoción y la protección de dichas inversiones estimulan las transferencias de capitales y tecnología entre los dos países,

considerando el Acuerdo Básico de Cooperación Económica, Industrial, Científico-Tecnológico, Técnica y Cultural entre Chile e Italia, suscrito en Santiago de Chile, el 8 de noviembre de 1990, y en particular su artículo VIII de ese Convenio,

reconociendo que el incentivo y la recíproca protección, en conformidad a los Acuerdos Internacionales, de tales inversiones extranjeras, realizadas o que se realicen y que impliquen real y efectiva transferencia de capitales, contribuyen al fomento de iniciativas empresariales en favor del desarrollo de las dos Partes Contratantes,

Han acordado las siguientes disposiciones:

mm

ca



ARTICULO I

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo:

1. Como "inversión", se comprende, independientemente de la forma jurídica elegida y del ordenamiento jurídico de referencia, cualquier tipo de bien invertido antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, por persona física o jurídica de una Parte Contratante, de acuerdo a las leyes y reglamentos de esta última.

En este marco de tipo general, el término "inversión" indica:

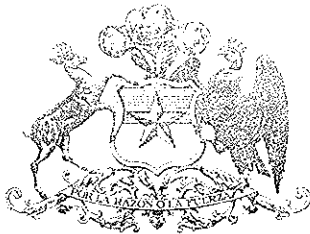
a) derecho de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, como cualquier otro derecho real, incluidos, mientras sean utilizables para inversiones, los derechos reales de garantía sobre propiedad de terceros,

b) acciones, obligaciones, cuotas de participación, cualquier título de crédito y todo otro documento de Estado y público,

c) créditos por sumas de dinero o cualquier otro derecho por prestaciones o servicios vinculados a una inversión y provenientes del exterior, como también los ingresos reinvertidos de inversiones, así como los ingresos a que se refiere el punto 5 del presente Artículo,

mm

Jan



- 3 -

d) derechos de autor, marcas comerciales, patentes, diseños industriales y otros derechos de propiedad intelectual e industrial, know-how, secretos comerciales, nombres comerciales y derechos de llave;

e) cualquier derecho de tipo económico conferido por ley o por contrato y cualquier licencia o concesión de acuerdo a las leyes, sobre ejecución de actividades económicas, incluyéndose la prospección, el cultivo, extracción y explotación de los recursos naturales.

2. Por "inversionista" se comprende una persona física o jurídica de una Parte Contratante que haya realizado, realice o haya asumido obligación de realizar inversiones provenientes del exterior en el territorio de la otra Parte Contratante.

3. Por "persona física" se comprende, con relación a cada una de las "Partes Contratantes", una persona física que tenga la nacionalidad de ese Estado de acuerdo a sus leyes.

4. Por "persona jurídica" se comprende, con relación a cada una de las Partes Contratantes, cualquier entidad constituida y con su sede en el territorio de una Parte Contratante de conformidad a su legislación o por ésta reconocida, como instituciones públicas y personas jurídicas en general, sociedades de personas o de capitales, fundaciones, asociaciones y esto independientemente de que su responsabilidad sea limitada o no.

5. Por "ingresos" se comprenden las sumas ganadas o que se obtengan de una inversión, incluyéndose, en particular, las ganancias o las cuotas de ganancias, intereses, utilidades de capital, dividendos, royalties, compensaciones por asistencia, servicios

mm

Qui



- 4 -

técnicos y otras remuneraciones, incluyéndose los ingresos reinvertidos y los incrementos de capital.

6. El término "territorio" designa el territorio terrestre y el mar territorial de cada una de las partes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el Derecho Internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de prospección, exploración, explotación y preservación de recursos naturales.

ARTICULO 2

Promoción y protección de las inversiones

1. Cada Parte Contratante promoverá, en la medida de lo posible, las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante en su propio territorio y admitirá tales inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones.

2. Cada una de las Partes Contratantes garantizará siempre un trato justo y ecuánime a las inversiones de inversionistas del otro Estado Contratante. Cada una de las Partes Contratantes garantizará que la gestión, el mantenimiento, el uso, la transformación, la cesación y la liquidación de las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas del otro Estado Contratante, como también por sociedades y empresas donde se hayan realizado dichas inversiones, no sean de ninguna manera alcanzadas por medidas discriminatorias y arbitrarias.

mm

Qui



- 5 -

ARTICULO 3

Trato nacional y Cláusula de la Nación más favorecida

1. Cada una de las Partes Contratantes, en el ámbito de su propio territorio, acordará para las inversiones, ganancias y actividades relacionadas con inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos favorable de aquel reservado para las inversiones, ganancias y actividades similares, relacionadas con inversiones de inversionistas propios o de cualquier otro tercer país.

2. Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas según sus leyes y reglamentaciones por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizará, con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la ampliación, la venta y, si fuera el caso, la liquidación de dichas inversiones.

3. Las disposiciones de los puntos 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a las ventajas y privilegios que una Parte Contratante reconoce o reconocerá a terceros países a base de su dependencia de una Unión Aduanera o Económica, de un Mercado Común, de Zonas de Libre Comercio, o de Acuerdos regionales o subregionales, de Acuerdos Económicos multilaterales internacionales o como consecuencias de Acuerdos realizados con terceros Estados para evitar la doble imposición tributaria o para facilitar los intercambios fronterizos.

mm

Qui



- 6 -

ARTICULO 4

Indemnización por Daños o Pérdidas

1. En caso de que los inversionistas de una de las Partes Contratantes deban sufrir pérdidas sobre sus inversiones en el territorio de la otra Parte, causadas por guerras u otros conflictos armados, por un estado de emergencia o por otros sucesos similares, la Parte Contratante donde se ha realizado la inversión ofrecerá una adecuada indemnización. Los pagos respectivos tendrán lugar sin injusto retraso y serán libremente transferibles.

2. Los inversionistas involucrados recibirán el mismo trato previsto para los nacionales de la Parte Contratante obligada y, en cualquier caso, recibirán un trato no menos favorable de aquel reconocido a los inversionistas de terceros Estados.

ARTICULO 5

Nacionalización o Expropiación

1. a) Las inversiones objeto del presente Acuerdo no pueden estar sujetas a ninguna medida que limite por tiempo determinado o indeterminado, el derecho de propiedad, de posesión, de control o de goce relacionados con ellas, salvo disposiciones específicas de las leyes, como también sentencias y ordenanzas dictadas por tribunal competente.

mm

[Signature]



- 7 -

b) Las inversiones de inversionistas de una de las Partes Contratantes no serán directa o indirectamente nacionalizadas, expropiadas, incautadas o sujetas a medidas que tengan efectos equivalentes en el territorio de la otra Parte Contratante, a no ser que lo mencionado se realice por causa de utilidad pública o de interés nacional y mediante una inmediata, completa y efectiva indemnización, y a condición de que tales medidas se tomen sobre bases no discriminatorias y de acuerdo a los procedimientos legales.

c) La justa indemnización será equivalente al valor efectivo del mercado de la inversión inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública o anunciada la expropiación, nacionalización o medida equiparable efectiva o inminente.

Se entiende que el valor efectivo del mercado incluye todos los elementos constitutivos y distintivos de la empresa y de las actividades empresariales.

La indemnización deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses según el tipo usual de interés bancario, desde la fecha de nacionalización o expropiación hasta la fecha de su pago. A más tardar en el momento de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, deberán haberse tomado debidamente medidas para fijar y satisfacer la indemnización.

En el caso de no llegarse a acuerdo entre el inversionista y la Parte obligada, la legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, y la cuantía de la indemnización, deberán ser recurribles en procedimiento judicial ordinario.

mm

fi



- 8 -

2. Las disposiciones que se refieren al párrafo 1 del presente Artículo se aplicarán también a las ganancias derivadas de una inversión, como también en caso de liquidación a las ganancias procedentes de esta última.

ARTICULO 6

Repatriación de Capitales, Ganancias, Retribuciones e Indemnizaciones

1. Cada una de las Partes Contratantes autorizará a los inversionistas de la otra Parte Contratante, luego de haber efectuado el pago de todas sus obligaciones fiscales, la transferencia al extranjero en cualquier moneda de libre convertibilidad y sin atraso injustificado de:

a) capitales y cuotas adicionales de capitales utilizados para el mantenimiento y el incremento de las inversiones;

b) utilidades netas, dividendos, royalties, compensaciones por asistencia y servicios técnicos, intereses y cualquier otra ganancia.

c) ganancias provenientes de la total o parcial venta o liquidación de la inversión;

d) fondos para el reembolso de préstamos relacionados a inversiones y para el pago de los intereses relativos, documentados de conformidad con la ley de la Parte Contratante en el territorio en el que la inversión se realizó, aplicable en la época en que el préstamo se contrató;

mm

Bin



- 9 -

e) remuneraciones, indemnizaciones, retribuciones y percepciones generadas por trabajo dependiente o autónomo o por prestaciones de servicios, realizados por nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, en el ámbito de la inversión o en conexión con su realización, como también las relativas a contribuciones y prestaciones para los fines previsionales y de seguro social, en la medida y según las modalidades previstas por sus leyes y los reglamentos nacionales en vigor;

f) las sumas por las indemnizaciones a que se refieren los Artículos 4 y 5 letra c).

2. Considerando el Artículo 3 del presente Acuerdo, las Partes Contratantes se comprometen a otorgar a las transferencias señaladas en el párrafo 1 del presente Artículo el mismo tratamiento reservado a aquellas procedentes de inversiones realizadas por inversionistas de terceros Estados, en el caso de que ese sea más favorable.

ARTICULO 7

Subrogación

1. En el caso de que una Parte Contratante o una de sus instituciones hubiera concedido una garantía contra riesgos no comerciales por inversiones efectuadas por uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante y haya efectuado pagos a base de la garantía otorgada, dicha Parte Contratante será reconocida subrogada de derecho en la misma posición de crédito del inversionista cubierto por el seguro. Para

mm

Pa



- 10 -

los pagos a realizarse en beneficio de la Parte Contratante o de su institución a base de dicha subrogación se aplicarán respectivamente los Artículos 4, 5 y 6 del presente Acuerdo.

2. Los inversionistas tendrán derecho a demandar o hacerse parte en las acciones ya iniciadas, en orden a proteger los restantes derechos de que pueden reclamar y que no han sido subrogados. De esta forma, habiéndose reclamado, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 9.

ARTICULO 8

Transferencias

Las transferencias mencionadas en los Artículos, 4, 5, 6 y 7 serán efectuadas sin retardo indebido, dentro de los seis meses, una vez cumplidas las obligaciones fiscales. Tales transferencias serán efectuadas en moneda de libre convertibilidad al cambio más favorable aplicable del mercado bancario en la fecha de transferencia.

ARTICULO 9

Solución de las controversias entre inversionistas y Partes Contratantes

1. Toda controversia relativa a las inversiones que surjan entre un inversionista de una de las Partes Contratantes y la otra Parte Contratante,

mm.

Jui



- 11 -

respecto a cuestiones reguladas por el presente acuerdo será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las partes en controversia.

2. Si estas consultas no aportan una solución, dentro de los seis meses contados desde la reclamación escrita de una de las Partes, la controversia podrá ser sometida a elección del inversionista:

- al órgano jurisdiccional competente de la Parte Contratante en cuyo territorio está situada la inversión, o

- al arbitraje internacional de conformidad a lo dispuesto en los párrafos 3 y siguientes del presente Artículo. La elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3. En caso de recurrirse al arbitraje internacional, la controversia será sometida a elección del demandante, a alguno de los órganos de arbitraje designados a continuación:

a) Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados" abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965.

b) a un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido, salvo acuerdo contrario de las Partes, en conformidad con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.) al cual se refiere la Resolución de la Asamblea General de la ONU 31/98 del 15 de diciembre de 1976. Los árbitros serán tres. Si los mismos no son nacionales de las Partes Contratantes, deberán ser nacionales de Estados que tengan relaciones

mm

Jim



- 12 -

diplomáticas con ellas.

4. Ninguna de las Partes Contratantes que sea parte en una controversia podrá plantear, en ninguna etapa del proceso arbitral ni de la ejecución de una sentencia arbitral, excepciones basadas en el hecho de que el inversionista, parte contraria en la controversia, haya percibido una indemnización destinada a cubrir todo o parte de las pérdidas sufridas, en cumplimiento de una póliza de seguro de garantía prevista en el Artículo 7 del presente Acuerdo.

5. El tribunal arbitral decidirá sobre la base del derecho de la Parte Contratante parte en la controversia, incluyendo las normas de esta última relativas a conflictos de leyes, las disposiciones del presente Acuerdo, los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, así como los principios de derecho internacional en la materia, especialmente el principio de la buena fe.

6. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las Partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de conformidad con la legislación nacional y de acuerdo a las convenciones internacionales en la materia vigentes para ambas Partes Contratantes.

7. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje o a un proceso judicial ya en marcha hasta que los procedimientos correspondientes hubieran sido concluidos, salvo que las Partes en la controversia no hubieran cumplido el laudo del tribunal arbitral o la sentencia del tribunal ordinario, según los términos de cumplimiento establecidos en el laudo o en la sentencia.

mm

Ben



- 13 -

ARTICULO 10

**Solución de las Controversias entre las
Partes Contratantes**

1. Las controversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo deberán, cuando sea posible, ser conciliadas por medio de consultas amigables de las dos Partes a través de los canales diplomáticos.

2. En el caso de que tales controversias no puedan ser resueltas en los seis meses sucesivos a partir de la fecha en la cual una de las Partes Contratantes haya notificado por escrito a la otra Parte Contratante, las mismas serán sometidas a solicitud de una de las Partes, a un Tribunal Arbitral ad hoc de acuerdo a lo dispuesto en el presente Artículo.

3. El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente manera: Dentro de los dos meses después del momento en el cual se reciba la solicitud de constitución del tribunal arbitral, cada una de las Partes nombrará un miembro. Los dos miembros deberán seguidamente seleccionar a un nacional de un tercer Estado que tendrá la función de Presidente. El Presidente deberá ser nombrado dentro de los tres meses a partir de la fecha de nombramiento de los otros dos miembros.

4. Si en los plazos fijados en el párrafo 3 del presente Artículo, una de las Partes no hubiese nombrado a su representante, cada una de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otros acuerdos, enviar una solicitud al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para hacer efectivo el

mm

Ala



-14 -

nombramiento. En el caso de que él sea nacional de una de las Partes Contratantes o que no le sea posible realizar tal función, se solicitará al Vice Presidente de la Corte que efectúe el nombramiento. En el caso de que el Vice Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o que no le sea posible realizar tal función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le sigue en el orden de precedencia y que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar el nombramiento.

5. El Tribunal Arbitral decidirá por mayoría de votos y sus decisiones tendrán carácter vinculante. Cada una de las Partes Contratantes deberá pagar los gastos de su propio representante y los de su representación en el proceso. Los gastos para el Presidente y los otros gastos estarán a cargo de las dos Partes Contratantes en partes iguales. El Tribunal Arbitral establecerá su propio reglamento.

ARTICULO 11

Relaciones entre Gobiernos

Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán independientemente del hecho que entre las Partes Contratantes existan o no relaciones diplomáticas o consulares.

ARTICULO 12

Aplicación de otras normas

1. En caso de que una cuestión

mm

Qui



- 15 -

esté regulada por el presente Acuerdo como también por otro Acuerdo Internacional por el cual participen los dos Estados Contratantes, o por el Derecho Internacional General, se aplicarán a las mismas Partes Contratantes y a sus inversionistas las normas que sean en su caso más favorables.

2. En el caso de que una Parte Contratante, en conformidad a leyes, reglamentos, disposiciones o contratos específicos, haya adoptado para los inversionistas de la otra Parte Contratante normas más propicias de las previstas por el presente Acuerdo, se reservará a los mismos el tratamiento más favorable.

ARTICULO 13

Ambito de aplicación del Acuerdo

1. El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones ya efectuadas o que se efectúen por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte y que, conforme a la legislación aplicable al momento que el presente Acuerdo entre en vigor, estén registrados por ésta como inversión extranjera.

2. En todo caso, no se aplicará a las controversias ya iniciadas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor ni a las reclamaciones pendientes o surgidas antes de tal fecha, ni tampoco por hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia ni por la mera permanencia de tales situaciones preexistentes.

mm

Qui



- 16 -

ARTICULO 14

Entrada en vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigor en la última fecha en la cual cada una de las Partes Contratantes haya notificado a la otra que sus requisitos constitucionales para la entrada en vigencia del presente Acuerdo se hayan cumplido.

ARTICULO 15

Duración y Vencimiento

1. El presente Acuerdo tendrá vigencia por un período de diez años, a partir de la fecha de cumplimiento de los procedimientos de notificación del Artículo 14, y será extendido tácitamente por períodos sucesivos de cinco años, a no ser que una de las dos Partes lo denuncie por escrito un año antes de la fecha de su respectivo vencimiento.

2. En lo que se refiere a las inversiones realizadas anteriormente a las fechas de vencimiento, a que se refiere el párrafo precedente, las disposiciones de los Artículos 1 al 13 quedarán en vigor por otros cinco años, a partir de las fechas antedichas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- 17 -

De lo cual se da fé que los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en dos ejemplares, en Santiago, el 8 de marzo de 1993, en idioma español y en idioma italiano, haciendo fé igualmente ambos textos.

Manuel

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE CHILE

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ITALIANA

Carlo Azeglio

ms.



PROTOCOLO

Con la firma del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana, sobre Promoción y Protección de Inversiones, se han asimismo acordado las cláusulas siguientes, que forman parte integrante de dicho Acuerdo.

1. Con referencia al Acuerdo en su totalidad:

En los textos originales en lengua italiana y en lengua española del Acuerdo, las palabras "cittadinanza" e "cittadino" corresponden a "nacionalidad" y "nacional".

2. En relación al Artículo 3:

Cada una de las Partes Contratantes regulará, según sus leyes y reglamentos en lo más favorablemente posible, los problemas relativos a la entrada, la estadía, el trabajo y los demás traslados en su territorio de los nacionales de la otra Parte Contratante y de sus familias que realicen actividades conectadas a las inversiones en el espíritu del presente Acuerdo.

3. En relación al Artículo 8:

(a) Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 6 párrafo 1 letra a) y 8, la República de Chile mantiene actualmente un plazo legal, únicamente para la repatriación de capital, el que en ningún caso podrá ser superior a tres años contado desde su fecha de internación.

(b) Mientras continúe en vigor el Programa chileno para la conversión de la deuda externa, la República de Chile otorgará el derecho de repatriación de las inversiones realizadas por

mm

Gi



inversionistas italianos en el marco de dicho Programa, una vez transcurridos diez años desde su internación, así como la transferencia de las utilidades después de transcurridos cuatro años. Las utilidades de los primeros cuatro años serán transferibles a partir del quinto año, en cuotas anuales del 25%, respectivamente.

(c) La República de Chile, en conformidad a las normas de este Convenio, se compromete a extender en beneficio de los inversionistas de la República Italiana, cualquier eliminación o disminución de los referidos plazos, que puedan ser legalmente adoptados en el marco de la política de libertad económica y de promoción de la inversión extranjera en Chile.

(d) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso alguno un inversionista italiano será tratado menos favorablemente en asuntos de transferencia que cualquier inversionista de un tercer Estado.

De lo cual se da fé que los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en dos ejemplares, en Santiago, el 8 de marzo de 1993, en idioma español y en idioma italiano, haciendo fé igualmente ambos textos.

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE CHILE

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ITALIANA



ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica del Cile ed il Governo della Repubblica italiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi ed, in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti cileni in Italia e per quelli italiani in Cile;

consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e,

tenuto conto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico- Tecnologico, Tecnico e Culturale , tra il Cile e l'Italia, sottoscritto in Santiago del Cile, l'8 novembre 1990, e in particolare del suo Articolo VIII,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in conformità agli Accordi internazionali, di tali investimenti stranieri, che siano realizzati o che si realizzino con reale ed effettivo trasferimento di capitali, contribuiscono ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento,

*per
u*



ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale di godimento, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni o servizi correlati ad investimenti provenienti dall'estero, nonché, come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali, avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettuato o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti provenienti dall'estero nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici e persone giuridiche in genere, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, ciò, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da



un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intende, il territorio compreso entro i confini terrestri ed il mare territoriale di ognuna delle due Parti Contraenti nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre i limiti del mare territoriale delle Parti predette e sopra le quali queste ultime esercitino o possano esercitare, in conformità al Diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione ai fini di prospezione, esplorazione, sfruttamento e preservazione di risorse naturali.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà, nella misura del possibile, gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio, e autorizzerà tali investimenti in conformità alla propria legislazione e ai propri regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti discriminatori od arbitrari.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti, ai redditi e alle attività connesse con gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, ai redditi e alle attività similari connesse con investimenti di investitori propri o di qualunque Paese terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente proteggerà nel suo territorio gli



investimenti effettuati secondo le proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacolerà, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'ampliamento, la vendita e, eventualmente, la liquidazione di detti investimenti.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad unioni doganali od economiche, associazione di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi frontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri simili avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

2. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente



nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per causa di pubblica utilità per motivi di interesse nazionale, dietro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la nazionalizzazione, esproprio o misura equivalente effettiva o imminente sia stata annunciata o resa pubblica.

Si intende che il valore effettivo di mercato comprende tutti gli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa e delle relative attività imprenditoriali.

Il risarcimento dovrà essere pagato senza ritardi e comprenderà gli interessi maturati, secondo il tipo usuale di interesse bancario, dalla data di nazionalizzazione o esproprio sino alla data del suo pagamento.

Non oltre il momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, si saranno dovute assumere le debite misure per determinare e pagare il risarcimento.

Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra l'investitore e la Parte obbligata, la legalità dell'esproprio, nazionalizzazione o misura equivalente, nonché l'ammontare del risarcimento, dovranno essere ricorribili in un procedimento giudiziario ordinario.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Trasferimento dei Capitali, dei Profitti, delle Retribuzioni e dei Risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti autorizzerà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;



b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento e per il pagamento degli interessi relativi, documentati in conformità alle disposizioni di legge della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato e applicabili al momento del loro ottenimento;

e) remunerazioni, indennità, retribuzioni e percezioni generate da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni di servizi, realizzati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'ambito dell'investimento o in relazione alla sua realizzazione, come pure i relativi contributi e prestazioni ai fini previdenziali e di sicurezza sociale, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

f) somme a titolo di risarcimento di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 5 paragrafo c).

2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta come surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o a una sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

2. Gli investitori conserveranno facoltà ad intervenire o costituirsi parte in azioni giudiziarie già avviate allo scopo di



tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano stati oggetto di surroga. Qualora sorgesse controversia, si applicheranno le procedure di cui al successivo Articolo 9.

Articolo 8 **Trasferimenti**

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio più favorevole applicabile dal mercato bancario alla data del trasferimento.

Articolo 9 **Soluzione delle Controversie tra Investitori e Parti** **Contraenti**

1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia.

2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di una delle due Parti, la controversia potrà essere sottoposta, a scelta dell'investitore:
- agli organi giudiziari competenti della Parte Contraente nel cui territorio sia localizzato l'investimento;
- oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti nei successivi paragrafi 3) e seguenti del presente Articolo.
L'elezione dell'uno o dell'altro foro da parte dell'investitore sarà definitiva.

3. In caso di ricorso ad arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'attore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:

a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965;



b) ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito, salvo diverso accordo tra le Parti, in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla risoluzione 31/98 del 15 dicembre del 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore Parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.

5. Il tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente che è parte nella controversia, tenendo conto delle norme di quest'ultima relative ai conflitti di legge, delle disposizioni del presente Accordo, delle clausole di eventuali accordi particolari relativi all'investimento nonché dei principi di diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente, dei principi della buona fede.

6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle convenzioni internazionali in materia vigenti per ambedue le Parti Contraenti.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Articolo 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative



all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, su iniziativa di una di esse, alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte nominerà un membro del Tribunale. Tali due membri sceglieranno quindi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero state ancora effettuate, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, richiedere la relativa designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare, verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segua in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.



Articolo 12
Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.
2. Qualora una Parte Contraente in conformità di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'Altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13
Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati già, o che si effettuino da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra ed i quali, in conformità alla legislazione applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati da quest'ultima registrati come investimento estero.
2. In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre essa non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle



rispettive procedure costituzionali.

Articolo 15
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 14 e verrà prorogato tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Santiago il 8 Marzo 1993, in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica del Cile

Per il Governo della
Repubblica italiana



P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica del Cile e il Governo della Repubblica italiana sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'intero Accordo:

nei testi originali in lingua spagnola ed in lingua italiana dell'Accordo, le dizioni "nacionalidad" e "nacional" sono intese corrispondere a quelle di "cittadinanza" e "cittadino".

2. In riferimento all'Articolo 3:

ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che, nello spirito del presente Accordo, effettuino attività collegate agli investimenti.

3. In riferimento all'articolo 8 :

a) Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 8, la Repubblica del Cile mantiene attualmente un termine, stabilito per legge, unicamente per il rimpatrio del capitale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comma a), che in nessun caso potrà superare i tre anni dall'ingresso dello stesso.

b) In vigenza del programma cileno per la conversione del debito estero, la Repubblica del Cile concederà il diritto di rimpatrio degli investimenti realizzati da investitori italiani nel quadro del menzionato Programma, trascorsi dieci anni dal loro ingresso, e dopo quattro anni per il trasferimento degli utili. Gli utili dei primi quattro anni saranno trasferibili a partire dal quinto anno, in quote annuali del 25%.

c) La Repubblica del Cile, in conformità con i principi contenuti nell' Accordo cui il presente Protocollo si riferisce, si impegna a concedere, a beneficio degli investitori della Repubblica Italiana, qualunque diminuzione o annullamento dei termini summenzionati, che possa essere introdotto per legge nel contesto



della politica di libero mercato e di promozione degli investimenti stranieri in Cile.

d) Senza pregiudizio di quanto stabilito in precedenza, in nessun caso l'investitore italiano avrà un trattamento meno favorevole in materia di trasferimenti di quello usato nei confronti degli investitori dei Paesi terzi.

Fatto in duplice copia a Santiago il 8 Marzo 1993, in lingua spagnola e in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica del Cile

Per il Governo della
Repubblica italiana